



Señor Juez

VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI

Dr. Carlos Eduardo Chaves Zúñiga

E. S. D.

REFERENCIA: Medio de Control Reparación Directa
DEMANDANTE: DEYSY MARIA SALDAÑA USURUAGA
DEMANDADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
RADICADO: 760013340021-**2016-00548-00**
ASUNTO: CONTESTACION DE LA DEMANDA

LEONARDO GALEANO BAUTISTA, mayor de edad y domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 79.781.324 de Bogotá, abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 127.079 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de Apoderado Judicial y obrando en representación de la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, conforme al poder otorgado y que se adjunta, me permito contestar la demanda Reparación Directa, instaurada por el señor Adrián Ramos y otros.

DEL TERMINO PARA LA CONTESTACION DE LA DEMANDA

El auto admisorio de la demanda, junto con la demanda, fue recibido en el correo electrónico, notificajuridica@supertransporte.gov.co, dispuesto por mi representada para notificaciones judiciales, el día 21 de noviembre de 2016. Es decir, a partir del día hábil siguiente se cuentan los 55 días de que tratan los artículos 172 y 199 CPACA y el artículo 612 del Código General del Proceso.

Por lo anteriormente expuesto se concluye que la contestación de la demanda se efectúa dentro de la correspondiente oportunidad legal.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Dando cumplimiento a la dispuesto en el Numeral 2º del artículo 175 del CPACA, en concordancia con el numeral 2º del artículo 96 del Código General del Proceso, me permito manifestar que ME OPONGO A TODAS Y CADA UNA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, las cuales denomina el actor como "DE LO QUE SE PRETENDE".

A LA PRETENSION PRIMERA: ME OPONGO. Al ser esta pretensión de carácter declarativo, mi oposición a la misma se funda por cuanto que la misma carece de fundamentos jurídicos, fundamentos fácticos y fundamentos probatorios. Y respecto de mi representada Superintendencia de Puertos y Transporte, se evidencia claramente una falta de legitimación en la causa por pasiva toda vez que NO HAY actuar por exceso o defecto, que pudiese generar el daño antijurídico alegado por la parte demandante.

A LA PRETENSION SEGUNDA: ME OPONGO. Al ser esta pretensión de carácter condenatorio, y consecuencia de la pretensión primera, me permito

1



sustentar mi oposición con similares argumentos, es decir, falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Se reitera que mi representada, la Superintendencia de Puertos y Transporte, no pudo generar el daño antijurídico alegado por la parte demandante y concretado en la demanda en "*perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente consolidado*" como los denomina el actor.

A LA PRETENSION TERCERA: ME OPONGO. Al ser esta pretensión de carácter condenatorio, y consecuencia de la pretensión primera, me permito sustentar mi oposición con similares argumentos, es decir, falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Se reitera que mi representada, la Superintendencia de Puertos y Transporte, no pudo generar el daño antijurídico alegado por la parte demandante y concretado en la demanda en "*perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente consolidado*" como los denomina el actor.

A LA PRETENSION CUARTA: ME OPONGO. Al ser esta pretensión de carácter condenatorio, y consecuencia de la pretensión primera, me permito sustentar mi oposición con similares argumentos, es decir, falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Se reitera que mi representada, la Superintendencia de Puertos y Transporte, no pudo generar el daño antijurídico alegado por la parte demandante y concretado en la demanda en "*perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante futuro*" como los denomina el actor.

A LA PRETENSION QUINTA: ME OPONGO.

A LA PRETENSION SEPTIMA: ME OPONGO.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Numeral 2º del artículo 175 del CPACA, en concordancia con el numeral 2º del artículo 96 del Código General del Proceso, me permito hacer pronunciamiento sobre cada uno de los hechos de la demanda de la siguiente manera:

DEL HECHO PRIMERO: No me consta. Me atengo a lo probado.

DEL HECHO SEGUNDO: No me consta. Me atengo a lo probado.

DEL HECHO TERCERO: No me consta. Me atengo a lo probado.

DEL HECHO CUARTO: No es un hecho, son manifestaciones y conclusiones subjetivas del actor.

DEL HECHO QUINTO: No es un hecho, son manifestaciones y conclusiones subjetivas del actor.

DEL HECHO SEXTO: No es un hecho, son manifestaciones y conclusiones subjetivas del actor.

DEL HECHO SEPTIMO: No me consta. Me atengo a lo probado.

DEL HECHO OCTAVO: No me consta. Me atengo a lo probado.

2



DEL HECHO NOVENO: No me consta. Me atengo a lo probado.

DEL HECHO DECIMO: No me consta. Me atengo a lo probado.

DEL HECHO DECIMO PRIMERO: No me consta. Me atengo a lo probado.

EXCEPCIONES

Conforme lo determina el numeral 6 del artículo 175 del CPACA, me permito proponer las siguientes excepciones.

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, RESPECTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.

Es claro que la actora, no se refiere para nada en todo el texto de demanda a mi representada Superintendencia de Puertos y Transporte. No indica cual es su papel en los presuntos daños a sus representados. Para el caso particular, el actor manifiesta que el día 25 de noviembre de 2014, presuntamente se presentó una explosión en el inmueble identificado con la carrera 7 D bis - calle 69 urbanización Fepicol, Lote 12, Manzana C, de la nomenclatura urbana de la Ciudad de Cali. Manifiesta el actor, que el mencionado inmueble se almacenaban galones y canecas metálicas y empaques plásticos de diferentes tamaños, todo presuntamente perteneciente a la empresa denominada COMERCIALIZADORA GPM.

Obsérvese Señor Juez, que el presente proceso, no existe una sola mención de su presunta responsabilidad en los presuntos daños sufridos por los demandantes. Por otra parte es sabido que se ha convertido de uso frecuente, que los abogados litigantes, prefieran tramitar los procesos de responsabilidad civil extracontractual ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debido a la demora de la rama civil y de cara a la agilidad con que los jueces administrativos tramitan los procesos. Deseo que este no sea el caso.

Ahora bien entrando a analizar la falla del servicio como elemento de la responsabilidad encuentra este apoderado que no le asiste razón al convocante para atribuir alguna acción u omisión que le pueda recaer a la Superintendencia de Puertos y Transporte, pues el control sobre el almacenamiento del combustible y su comercialización no es de competencia de esta entidad.

Adicionalmente, frente al transporte que podríamos decir, en principio, que es responsabilidad de esta entidad por el servicio en sí, corresponde a las autoridades de policía su control en carretera verificando su transporte legal, reglamentario y de encontrar alguna irregularidad al transportador será notificada a la entidad quien a través de su poder y facultad de vigilancia entraría a investigar y posteriormente a sancionar al prestador de servicio público de transporte, hecho que en la actualidad no se ha presentado, por lo tanto no hay una falla eficiente del servicio por parte de la entidad que represento, que genere un desequilibrio de las cargas públicas y por ende existe la falta de legitimación por pasiva en el llamamiento a esta entidad, por carecer de imperativo factico activo o pasivo que la convierta en responsable de los acá narrados.



INEXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURIDICO RESPECTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

Debemos iniciar afirmando, que el origen de la presunta lesión del patrimonio material e inmaterial del convocante, no es derivado de una acción u omisión en sus funciones de inspección, vigilancia y control, por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Otrora, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido tres elementos que deben confluir para la existencia de la responsabilidad por parte del Estado, a saber: "1) *Un daño antijurídico, es decir un daño que el afectado no está en el deber legal de soportarlo, por cuanto no existe norma que así lo establezca*; 2) *Una falla del servicio, consistente en el mal funcionamiento de la Administración, porque el servicio no se prestó o se prestó en forma tardía o deficiente, es decir que se trata de un defecto en la ejecución de las funciones a cargo de las autoridades estatales y que puede presentarse bien por acción o bien por omisión*; 3) *finalmente, es necesario que el daño antijurídico se haya producido como consecuencia directa de esa falla del servicio, o sea que ésta ha debido ser la causa eficiente de aquel*."¹

En algunas hipótesis, y obedeciendo a los aspectos de hecho y derecho de cada caso en concreto, el segundo elemento antes mencionado, puede variar, es decir, el Estado puede ser responsable no solo por *falla en el servicio*, sino también por *daño especial* (desequilibrio de las cargas públicas), por *riesgo creado o excepcional* (actividades peligrosas), o por *falla en la función pública* (ilegalidad de actos administrativos).

Respecto a la carga probatoria, puede ocurrir que la falla en el servicio sea probada o presunta.

Lo primero cuando está en cabeza del demandante demostrar los elementos que constituyen la responsabilidad del Estado. Lo segundo, cuando se presume la falla en el servicio, razón por la cual la carga probatoria se traslada hacia el demandado, debiendo este demostrar la ausencia de la falla.

Hipótesis que se erigen como verdaderos títulos jurídicos de imputación respecto a la responsabilidad del Estado, esto es, formas de reproche *jurídicas* en los cuales se cimenta la obligación, en cabeza del Estado, de indemnizar un daño en el plano jurídico.

Nexo causal. Causa eficiente o adecuada.

Omitiendo los casos en los cuales puede existir imputación jurídica sin que se configure imputación fáctica², el nexo causal sigue siendo uno de los elementos necesarios para la constatación de la responsabilidad estatal.

Acorde al principio según el cual, *solo se responde por los efectos de su propia conducta*, se erige el requisito de nexo causal, el cual *"constituye un concepto*

¹ Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de mayo de 2010. Expediente número 18380, Consejero ponente Mauricio Fajardo Gomez.

² "Finalmente, puede haber causalidad jurídica o moral aunque no haya causalidad física. En efecto, hay casos en que el agente omite realizar una conducta a la que estaba obligado legal o contractualmente y precisamente por haber omitido ese comportamiento, no interrumpe la cadena causal de fenómenos que finalmente desemboca en la producción de un daño." Tamayo Jaramillo Javier, Tratado de la Responsabilidad Civil. Editorial Legis, Bogotá D.C. 2011. Pág. 249.



estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño.”³

Para determinar si en un caso en concreto “*existe o no un nexo de causalidad directa entre la conducta del demandado y el daño sufrido por el demandante*”⁴ han emergido diferentes teorías (equivalencia de las condiciones, causa próxima, acción humana, causalidad adecuada, causa eficiente) que tratan de solucionar tal problemática.

Para que exista una modificación *fenomenológica* de la realidad es necesario que ésta haya sido ocasionada por otro igual. Es decir, para que pueda generarse un daño antijurídico éste tuvo que tener una causa. La problemática radica en el proceso mediante el cual se genera el daño, ello por cuanto puede haber múltiples causas que converjan para la producción del resultado, o puede ocurrir que éste sea consecuencia de una serie de causas *eslabonadas*.

Según Aristóteles, existe una causa material, una causa formal, una causa eficiente, y finalmente una causa final. Como causa eficiente se entiende aquello que *ha producido* ese algo.

Siguiendo al ilustre filósofo, el Consejo de Estado ha desarrollado el concepto de *causa eficiente* como eje central para determinar el nexo causal o la imputación fáctica.

Menciona el Consejo de Estado:

“La doctrina ha señalado que la causa eficiente es lo que se considera como fundamento u origen de algo; basta la verificación de la relación antecedente-consecuente para que pueda sostenerse que un hecho es productor y otro el producido, uno el engendrante y otro el engendrado. No interesa en la consideración meramente física si el encadenamiento es próximo o remoto, cercano o alejado en el tiempo o en el espacio: basta que ocurra, que exista, que se dé. “Cualquier suceso natural o hecho humano es susceptible de generar repercusiones que se expanden por todo el ámbito social al entrelazarse con otros hechos o acontecimientos que son, a su vez, consecuencia de sucesos anteriores. Esta expansión en el espacio y en el tiempo ocurre en círculos concéntricos, parecidos a los que produce una piedra al caer en el agua tranquila de un estanque; cuanto más alejados están del lugar del impacto, más débiles o imperceptibles se tornan por lo regular tales efectos”^{5, 16}

Otro tanto sucede con la teoría de la causa adecuada que “*considera también que para ser retenido como causa de un daño, un hecho debe ser la condición necesaria de dicho daño. Entendemos por ello la condición sine qua non, es decir, aquella sin la cual el daño no se habría producido.*”⁷

En cuanto al Daño Antijurídico el Consejo de Estado lo ha definido: “(...) *consiste en lesión de interés legítimo, patrimonial o extra patrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o*

³ Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del día veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012). Consejero ponente Enrique Gil Botero.

⁴ Tamayo Jaramillo Javier, Tratado de la Responsabilidad Civil. Editorial Legis, Bogotá D.C. 2011. Pág. 374.

⁵ MOSSET ITURRASPE, “Responsabilidad por daños” Tomo VIII, Rubinzal – Culzoni Editores. Buenos Aires, pag. 401.

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 20 de abril de 2005. Consejero ponente Ramiro Saavedra Becerra.

⁷ Tamayo Jaramillo, obra cit. Pág. 378.



el derecho. De acuerdo con el artículo 90 de la C.P. el Estado responde por el daño antijurídico, calificación que se deduce al comprobar que el derecho no le impuso a la víctima el deber de soportar el daño”.

Por lo tanto es el daño antijurídico, como primer elemento de la responsabilidad civil que se debe probar, cosa que en el presente caso no se evidencia si quiera sumariamente, pues ni los hechos de la demanda, ni los medios idóneos de prueba aportados, ofrecen certeza frente a la materialidad del daño sufrido por los convocante. Pues la descripción fáctica se origina en un presunto accidente, y no en una determinada acción u omisión por parte de la Supertransporte.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la materialidad del daño es el primer elemento a estudiar, y en este estado de las cosas no se evidencia ni fáctica ni probatoriamente la materialidad, existencia y extensión de este que amerite ser indemnizado, no es posible en esta etapa procesal acceder a la petición indemnizatoria formulada en contra, por lo menos de mi representada SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE. Recordemos que acá no se evidencia daño causado por el actuar en exceso o en defecto de la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.

Finalmente, frente al nexo causal, al no existir acción u omisión de mi representada es imposible que se presente un nexo o hecho que sea productor y otro el producido, luego entendemos que no hay acción u omisión de la entidad que se configure como condición sine qua non, para que se hubiese presentado el daño, es decir, la entidad no intervino en la producción del resultado o daño.

EXCEPCION DE OFICIO o GENERICA

De acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 187 del CPACA,, se faculta al operador judicial para decidir de oficio sobre cualquier excepción que a lo largo del proceso se encuentre probada. Solicito al Señor Juez que de encontrar probada alguna otra excepción no planteada en este escrito, se sirva pronunciarse sobre ella a favor de mi representada SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE.

PETICION

De acuerdo a los argumentos facticos y jurídicos particulares del caso, y las pruebas aportadas, recaudadas y practicadas, pido respetuosamente al Señor Juez se sirva declarar probadas las excepciones planteadas a favor de la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, y en consecuencia deniegue todas las pretensiones de la demanda.

Como consecuencia de lo anterior y en virtud del artículo 188 del CPACA, se sirva condenar en costa a la parte demandante.

OPOSICION A LA CUANTIA

Me permito manifestar que me OPONGO la cuantía del presente medio de control de REPARACION DIRECTA, presentada por la demandante.



NOTIFICACIONES

Conforme lo dispone el **artículo 205 del CPACA desde ya, acepto y autorizo ser notificado por medio de correo electrónico**, así:

Mi representada **SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES** recibe notificaciones en la Calle 63 # 9ª - 45, barrio Chapinero de la Ciudad de Bogotá D.C. o en el correo electrónico notificajuridica@supertransporte.gov.co

El suscrito abogado en mi condición de apoderado de la **SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES**, manifiesto que recibo notificaciones en el correo electrónico lgaleanobautista@yahoo.com

ANEXOS

Me permito aportar:

1. Poder otorgado a mi favor para actuar como apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, y sus anexos en cuatro (4) folios.
2. CD con contestación de la demanda en formatos WORD y PDF.

Cordialmente.



LEONARDO GALEANO BAUTISTA

C.C. 79.781.324 de Bogotá

T.P. 127079 del Consejo Superior de la Judicatura

APODERADO SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE



SEÑORES:

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI
E. S. D.

ASUNTO: OTORGAMIENTO DE PODER

EXPEDIENTE N°: 76001-3340-021-2016-00548-00

ACTOR: DEYSY MARIA SALDAÑA USURIAGA

ACCIONADO: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

JUAN PABLO RESTREPO CASTRILLON, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número C.C.16.940.049 de Cali (Valle), actuando en mi calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Puertos y Transporte, de conformidad con las facultades delegadas en la Resolución No.23778 del 16 de diciembre de 2005, entidad representada por el señor Superintendente de Puertos y Transporte **JAVIER ANTONIO JARAMILLO RAMÍREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.16.451.802., representante de la Nación - Superintendencia de Puertos y Transporte - **SUPERTRANSPORTE**, creada por la Ley Primera (1°) de 1991, cuyas competencias están consagradas en los Decretos Nos.101 y 1016 de 2000, modificados por el Decreto No.2741 de 2000, manifiesto que otorgo poder especial amplio y suficiente en cuanto a derecho se refiere al doctor **LEONARDO GALEANO BAUTISTA**, abogado en ejercicio, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.781.324, y con Tarjeta Profesional No.127.079 del C. S. de la J., para que en nombre y representación de la Superintendencia de Puertos y Transporte - **SUPERTRANSPORTE**, se haga parte dentro del proceso de la referencia, conteste e intervenga en el mismo, con el fin de asumir la defensa, y en general adelante todas las actuaciones necesarias en beneficio de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

El doctor **LEONARDO GALEANO BAUTISTA**, tiene las facultades de asumir, sustituir, renunciar, reasumir, conciliar, transigir, terminar el proceso, allegar o pedir pruebas, impugnar e interponer los recursos de ley y en general ejercer todas las acciones encaminadas a la defensa de los intereses de la Entidad hasta la culminación de la acción que nos ocupa, sin que pueda decirse en momento alguno que actúa sin poder.

Respetuosamente solicito reconocer personería para actuar al doctor **LEONARDO GALEANO BAUTISTA** en los términos y para los fines del presente mandato.

Cordialmente,

Acepto:

JUAN PABLO RESTREPO CASTRILLON
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA
C.C.16.940.049

LEONARDO GALEANO BAUTISTA
C.C. 79.781.324
T.P. 127.079 C.S.J.

